0104-DRPP-2022. - DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE PARTIDOS POLÍTICOS. San José, a las catorce horas con veinte minutos del seis de junio de dos mil veintidos.

Diligencias previas a resolver misiva de derecho de petición incoada por el señor José Martín Zamora Cordero, presidente del Comité Ejecutivo Superior del partido Alianza por San José (PASJ), mediante oficio n.º PASJ 012-0-2022.

En atención al oficio n.º PASJ 012-0-2022 de fecha primero de junio del año en curso, remitido el mismo día a la cuenta oficial de correo electrónico de este Departamento y suscrito por el señor José Martín Zamora Cordero, en su calidad de presidente del Comité Ejecutivo Superior del partido Alianza por San José, mediante el cual solicita: "(...) al cotejar la información que nos remitieron en los listados de los Miembros de la Estructura Partidaria adjuntos al oficio DRPP-0013-2022 (...) y los registros que tenemos (...) hemos encontrado que del distrito Hospital no incluyeron las personas designadas, y que se nos comunicó mediante el oficio 871-DRPP-2019 (...) y que corresponde a la "Acreditación de los nombramientos realizados en la estructura del distrito Hospital (...) en virtud de la renuncia de los titulares." (...) En archivo no tenemos constancia de renuncia de Wendy María Álvarez Núñez (...) y Jonathan Ugalde Villarreal (...) siendo así, solicito revisión de esta información y sean incorporados al listado oficial (...)".

Sobre el particular, resulta indispensable realizar un sucinto análisis de los preceptos legales en relación con el derecho de petición de las y los Administrados; así las cosas, en primer término, los ordinales uno, cuatro, inciso a), y el inciso b) del artículo siete de la "Ley de Regulación del Derecho de Petición" (Ley n.º 9097, de nueve de octubre de dos mil doce, publicada en el Alcance n.º 49, de La Gaceta n.º 52, de catorce de marzo de dos mil trece), indican lo siguiente:

"ARTÍCULO 1.- Titulares del derecho de petición

Todo ciudadano, independientemente de su nacionalidad, puede ejercer el derecho de petición, individual o colectivamente, en los términos y con los efectos establecidos por la presente ley y sin que de su ejercicio pueda derivarse ningún perjuicio o sanción para el peticionario. Todo lo anterior se

ajustará al precepto establecido en el artículo 27 de la Constitución Política de la República de Costa Rica.

[...]

ARTÍCULO 4.- Formalidad en el ejercicio del derecho de petición

a) Las peticiones se formularán por escrito, debiendo incluir, necesariamente, el nombre, la cédula o el documento de identidad, el objeto y el destinatario de la petición. <u>Cada escrito deberá ir firmado por el peticionario o los</u> peticionarios.

[...]

ARTÍCULO 7.- Peticiones incompletas. Plazo de subsanación o inadmisión

[...]

- b) Si el escrito de petición no reuniera los requisitos establecidos en el artículo 4, o no reflejara los datos necesarios con la suficiente claridad, se requerirá al peticionario para que subsane los defectos advertidos en el plazo de cinco días hábiles, con el apercibimiento de que, si así no lo hiciera, se le tendrá por desistido de su petición, notificándose entonces su archivo inmediato."
- (...) (Subrayado es suplido).

Por su parte, la "Ley de Certificados, Firmas Digitales y Documentos Electrónicos" (Ley n.º 8454, de treinta de octubre de dos mil cinco, publicada en La Gaceta n.º 197, de trece de octubre de dos mil cinco), en su numeral octavo, preceptúa que:

"Artículo 8°-Alcance del concepto. Entiéndese [sic] por firma digital cualquier conjunto de datos adjunto o lógicamente asociado a un documento electrónico, que permita verificar su integridad, así como identificar en forma unívoca y vincular jurídicamente al autor con el documento electrónico.

<u>Una firma digital se considerará certificada cuando sea emitida al amparo de un certificado digital vigente</u>, expedido por un certificador registrado.". (Subrayado no pertenece al original).

Aunado a lo anterior, el artículo diez del "Reglamento a la Ley de Certificados, Firmas Digitales y Documentos Electrónicos" (Decreto Ejecutivo n.º 33018, de veinte de marzo de dos mil dieciséis, publicado en la Gaceta n.º 77, de veintiuno de abril de dos mil dieciséis), establece lo sucesivo:

"Artículo 10.-**Reconocimiento jurídico.** Solo tendrán pleno efecto legal frente a terceros, así como respecto del <u>Estado y sus instituciones, los certificados</u> digitales expedidos por certificadores registrados ante la <u>Dirección de Certificadores de Firma Digital</u>.". (Subrayado es propio).

En virtud de lo anterior, la Dirección General del Registro Electoral y de Financiamiento de Partidos Políticos por Circular n.º DGRE-001-2022, de fecha diecisiete de enero del año en curso, hizo de conocimiento de los partidos políticos que, <u>aquellas solicitudes que sean remitidas por correo electrónico deben contener firma digital, como requisito necesario para su tramitación, de lo contrario se procederá con el archivo de la gestión, por lo que en caso de no contar con la firma digital, los interesados deberán presentar el documento de forma física con la firma autógrafa (puño y letra).</u>

Así las cosas, realizadas las verificaciones a la misiva suscrita por el señor Zamora Cordero, respecto a los requisitos formales de admisibilidad, se constató que la firma digital contenida en el documento supra, no es válida y/o se encuentra vencida, por cuanto, presenta problemas de garantía de integridad, autenticidad y de validez en el tiempo, por lo que, la solicitud bajo análisis adolece del requisito indispensable contenido en el artículo cuatro de la "Ley de Regulación del Derecho de Petición", sea este: firma -ológrafa o digital- de conformidad con lo consagrado en el inciso b) del numeral siete de la última norma citada, por lo expuesto, se previene al señor José Martín Zamora Cordero para que, en el plazo improrrogable de cinco días hábiles, contados a partir del día hábil siguiente a efectuada la notificación de este acto, aporte su petición original por escrito, y en caso de que desee enviarla por medio digital, se deberá ajustar a lo indicado en el numeral octavo de la "Ley de Certificados, Firmas Digitales y Documentos Electrónicos"; además, se hace de conocimiento de la parte

interesada que, <u>en caso de no subsanar lo acá indicado, se tendrá por desistida su</u> <u>petición y se procederá a su archivo de inmediato, sin más trámite</u>.

Notifíquese a las cuentas oficiales de correo electrónico de la agrupación política.

Martha Castillo Víquez Jefa

MCV/mch/amq C.: Expediente n.º 036-2001, partido Alianza por San José Ref., No. S 866-2022